

revista valenciana
d'estudis autonòmics

2017 | nº 62

Redacció i administració:

Direcció General de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern.
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.
Passeig Albereda, 16. 46010 València
Tl. 96 192 23 44.
E-mail: rvea@gva.es

Distribució i subscripció:

Llibreria de la Generalitat (LliG)
C. Navellos, 8. 46003 València
Tl. 96 392 60 80. Fax 96 391 32 73

Producció:

Tórculo Comunicación Gráfica, S. A.

ISSN: 0213-2206

Dipòsit legal: V-1172-1996

Nota de redacció: La revista no es fa responsable ni compartix necessàriament les opinions expressades pels autors, que les formulen davall la seua exclusiva responsabilitat.

Bienestar, autonomía y Constitución

Una Constitución normativa y democrática, a la vez, refleja cambios sociales y los prefigura. Su carácter jurídico evita que el constituyente -y los que la utilicen en su vigencia histórica- caigan en la tentación de la proclama, de hacer el retrato -condenado a la inmovilidad- de un momento particular, por importante que sus protagonistas lo consideren. Su vocación democrática debe asegurar que considere su horizonte como una realidad abierta, necesariamente plural, porque el futuro siempre es más diverso que lo que cabe en cualquier imaginación constitucional. De estas dos virtudes participó la Constitución de 1978 (CE).

A menudo se olvida que fue la primera de las españolas que reunió tal carácter de democrática y normativa. La de 1869 apenas si intuía que cosa real fuera la democracia y la de 1931, que lo identificó muy bien, se inscribió en el ciclo naciente del constitucionalismo normativo, pero los avatares de la época, los golpes de los que deseaban el caos y la ignorancia de muchos de los destinados a hacerla posible, acabaron por preparar su destino de símbolo valiosísimo pero humillado por el fascismo. Aunque sólo fuera por esta consideración la CE merece una relectura más empática que la que le ofrecen, por un lado, apasionados amantes que, al negar su reforma tras 40 años, apuestan por ahogar a la criatura, y, por otro, cultores de ensueños providencialistas que, en ningún caso, podrán encontrar una Constitución que se ajuste a la fertilidad de su fantasía.

Se defiende la Constitución, en todo caso, desde la crítica. La crítica no dogmática: la que valora por igual lo hecho y lo olvidado; la que advierte lo que permite aún y aquello en lo que ha alcanzado sus fronteras. Desde esta perspectiva la CE identificó en buena medida los cambios que la novedad cultural del momento exigía y supo incluirlos -aunque a veces de manera temerosa- en el texto, dándoles muchas veces una cobertura jurídica inimaginable en la España eterna. Por limitada que hoy se vea, lo que significó la CE en orden a favorecer la igualdad, la diversidad o una libertad materialmente entendida, fue inmenso. A menudo se olvida que aquello que no estuvo en el texto constitucional ha sido después posi-

ble mediante *su* desarrollo legislativo. ¿Puedo el constituyente haber dado algunos pasos más? Es opinable en ciertas cuestiones. Pero cuando se piensa que el *problema militar* y el *problema religioso*, auténtica pesadilla de los liberales y demócratas desde 1812, han sido superados –si bien algunos prefiriéramos un redactado más vigoroso en determinadas materias–, significa, a la vez, que la sociedad española había variado mucho y que la CE supo interpretar y confirmar esos cambios.

Pero había otros dos *problemas* enquistados en el devenir histórico: el *regional* y el *social*. En ambos casos también se enfocaban de manera muy distinta en 1975, y no sólo por algunas transformaciones sociológicas de la década española de los 60, como por cambios estructurales de alcance mundial: la descolonización, la Guerra Fría, la normalización de gobiernos socialdemócratas... El franquismo dejó como duro legado el terrorismo pero también, paradójicamente, la imposibilidad de reconstruir un discurso españolista como los de antaño, africanista y menéndezpelayista. Por otra parte los protagonistas mas inteligentes y/o íntegros de la Transición fueron conscientes de que la palanca que acabó por alterar el mapa del continuismo y del primer reformismo, fueron las formidables movilizaciones protagonizadas mayoritariamente por una clase obrera que supo asociar sus intereses particulares a los de la lucha por un Estado democrático de derecho.

Por esta vía en la misma partida de nacimiento de la Constitución estuvo el diseño formal de un Estado social avanzado y un reconocimiento de la pluralidad como algo intrínseco a la realidad que se quería transformar y constitucionalizar: el Estado autonómico –nunca nombrado así en la CE– nunca fue un *añadido* a la democracia, sino algo consustancial a ella, de tal manera que era necesario buscar alguna respuesta operativa a esa diversidad o la democracia misma sería prácticamente inviable. Y lo mismo sucedía si no había una estabilización en las relaciones socio-económicas. Aunque no hubiera unos Pactos de la Moncloa autonómicos. Pero esa es otra historia.

Afianzadas estas dos realidades se produjo un hecho que quizá no estuvo previsto por los constituyentes: si el Estado autonómico tenía sentido sería porque daba respuesta a las necesidades y demandas más próximas a la ciudadanía y si el *momento social* del Estado necesitaba arraigar precisaba de fuertes dosis de descentralización instrumental. Por estas vías –casi siempre con un trazado más retorcido del que aquí puede apuntarse– se fue produciendo la simbiosis entre el desarrollo autonómico y las políticas de bienestar, fuertemente simbolizadas en la sanidad y la educación, y ampliadas luego con otras iniciativas favorables a la igualdad y la inclusión social. Si el art. 14

CE prohíbe la discriminación, el 9.2 mandata a los poderes públicos a comprometerse en la lucha contra todas las fuentes de discriminación: ese fue un mandato que, crecientemente, aunque con diferente apasionamiento, fue adoptado por las Comunidades Autónomas y, en algunos aspectos, por los Ayuntamientos. La Constitución había entregado a la ciudadanía poderosos recursos jurídicos y discursivos para *acercarse* a sus gobernantes a exigir lo que se percibía como *común*, digno de ser administrado solidariamente y con incipientes dosis de participación. Incluyendo las quejas sempiternas a sistemas que nunca alcanzan a resolver *todos* los problemas. Pero esa carga de insatisfacción es también una forma de normalidad.

Y en esa llegó la Gran Crisis. Y con la crisis el afloramiento de proyectos neoliberales. A veces, de la contradicción entre servir al Dios de las demandas ciudadanas y a la ética de la dignidad subyacente en el art. 9.2, y al demonio de unos principios triunfantes que enarbolaban la equívoca bandera de eliminar impuestos y, en nombre de la libertad, abandonar a su suerte a los más vulnerables, esperando que la *mano mágica* fuera cada vez mas mágica. En esa antinomia incidió con furia las posibilidades abiertas por la disciplina financiera de la UE que golpeó a las Comunidades Autónomas -que no habían andado sobradas de errores y abusos-. Los ajustes económicos supusieron directamente debilitar al constitucional Estado social. Pero, en la *versión española* de tal ajuste eso pasó por preconizar un neocentralismo que no dudó en usar de toda una maquinaria legal y simbólica que muchas veces pasaba inadvertida para grupos de la ciudadanía, más quejosa que nunca ante los desastres de unos servicios públicos en retirada cuando más se les necesitaba, pero incrédula ante todo lo que no fuera el discurso oficial que centrifuga las culpas antes que asumir las consecuencias del neoliberalismo más dogmático.

El volumen monográfico de esta Revista pretende, ante todo, servir de recordatorio crítico de estos hechos. No se trata de despachar ideas legítimas, aunque no compartidas, sino de evidenciar la complejidad de los entornos económicos, jurídicos y culturales en los que se está desenvolviendo el debate entre neocentralismo, bienestar, asistencialismo, inclusión, refundación del Estado autonómico que es también el Estado social y democrático de Derecho que establece el artículo 1º de nuestra Constitución. Me parece que es una buena contribución a la reflexión. El lector dirá.

MANUEL ALCARAZ RAMOS

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana